CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
11 ABR. 2025
RECIBIDO
Firma: Hora: 15:20h.

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

COMISION DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2024 – 2025

Señor Presidente:

Ha sido remitido, para estudio y dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, las siguientes iniciativas legislativas el Proyecto de Ley 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; presentado a iniciativa de los señores congresistas Guillermo Bermejo Rojas integrante del Grupo Parlamentario Perú Democrático; Hamlet Echeverría Rodríguez del Grupo Parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú; y Jhakeline Katy Ugarte Mamani del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

Las iniciativas legislativas ingresaron en atención del ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República.

Luego del análisis y debate correspondiente realizado de manera semipresencial bajo la Plataforma Microsoft Teams, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en su Décima Sesión Ordinaria de fecha 11 de marzo de 2025, acordó por **MAYORÍA** de los presentes la **APROBACIÓN** del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; con Texto Sustitutorio propone la Ley que modifica la Ley 28611, Ley General del Ambiente, para asegurar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la fiscalización de los delitos ambientales; con los votos favorables de los señores congresistas:Guillermo Bermejo Rojas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Isaac Mita Alanoca, Luis Roberto Kamiche Morante, María Elizabeth Taipe Coronado, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Silvana Emperatriz Robles Araujo y Ruth Luque Ibarra. Con los votos en contra de las señoras congresistas: Mery Eliana Infantes Castañeda, Jeny Luz López Morales y Auristela Obando Morgan.

Se deja constancia que en la sesión se aprobó por unanimidad el acta, con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos.

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

I. SITUACIÓN PROCESAL

1.1. Antecedentes Procedimentales

El Proyecto de Ley 3853/2022-CR; ingresó al Área de Trámite Documentario el 28 de diciembre de 2022. El 29 de diciembre de 2022 se decretó e ingresó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como segunda comisión dictaminadora, y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como primera comisión dictaminadora para su estudio y dictamen. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos no ha emito dictamen respecto a este proyecto de ley.

El Proyecto de Ley 8287/2023-CR; ingresó al Área de Trámite Documentario el 28 de junio de 2024. El 28 de junio de 2024 se decretó e ingresó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como única dictaminadora para su estudio y dictamen.

El Proyecto de Ley 9944/2024-CR; ingresó al Área de Trámite Documentario el 15 de enero de 2025. El 16 de enero de 2025 se decretó e ingresó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como primera comisión dictaminadora para su estudio y dictamen.

El Proyecto de Ley 9967/2024-CR; ingresó al Área de Trámite Documentario el 17 de enero de 2025. El 20 de enero de 2025 se decretó e ingresó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como primera comisión dictaminadora para su estudio y dictamen.

1.2. Antecedentes Parlamentarios

En el Período Parlamentario 2021–2026 se presentaron los Proyectos de Ley **3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR**; mediante el cual se propone derogar el artículo 149 y modificar el artículo 72 de Ley General del Ambiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

El Proyecto de Ley **3853/2022-CR;** que propone la Ley que deroga el Artículo 149° de la Ley General del Ambiente. Esta iniciativa comprende 3 artículos. Para ello se plantea la siguiente fórmula normativa:

LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 149° DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Artículo 1. Objeto de la Ley

El objeto de la presente ley es derogar el artículo 1490 de la Ley General del Ambiente por contener disposiciones que condicionan la actuación del Ministerio Público y que amenazan a quienes deciden denunciar la presunta comisión de delitos ambientales.

Artículo 2. Deróguese el artículo 149° de la Ley General del Ambiente.

Deróguese el artículo 149° de la Ley General del Ambiente y las normas que se opongan al objeto de la presente ley.

Artículo 3. Vigencia de la Ley Peruano.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

El Proyecto de Ley 8287/2023-CR; que propone la Ley que modifica el Artículo 72 de la Ley General del Ambiente 28611. Esta iniciativa comprende 2 artículos. Para ello se plantea la siguiente fórmula normativa:

FORMULA LEGAL LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 28611

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objetivo garantizar la consulta previa y autorización de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas; y población de las áreas de influencia directa e indirecta respecto del aprovechamiento de sus recursos naturales.

Artículo 2. Modificación del artículo 72, incisos 1,2 y 3 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Se modifica el artículo 72 y sus respectivos incisos de la Ley General del Ambiente 28611, con los siguientes textos:

> **Artículo 72. Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, y población del área de influencia.**

72.1 Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas; y **de la población de las áreas de influencia directa e indirecta,** adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento a económica ni a sus valores tradicionales.

72.2 En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas; y **de la población de las áreas de influencia directa e indirecta,** los procedimientos de **consulta previa obligatoria** se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la legislación pertinente.

72.3 De conformidad con la ley, los pueblos indígenas y las comunidades nativas y campesinas; y **de la población de las áreas de influencia directa e indirecta** pueden beneficiarse de los recursos de libre acceso para satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales. Asimismo, tienen derecho preferente para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de sus tierras, debidamente tituladas, salvo reserva del Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros, en cuyo caso tienen derecho a una participación justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse del aprovechamiento de dichos recursos.

El Proyecto de Ley 9944/2024-CR; que propone la Ley que deroga el Artículo 149° de la Ley General del Ambiente. Esta iniciativa comprende 3 artículos. Para ello se plantea la siguiente fórmula normativa:

LEY QUE FORTALECE LAS INVESTIGACIONES PENALES EN MATERIA AMBIENTAL, AL MODIFICAR EL NUMERAL 149.1 DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto modificar el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Artículo 2. Finalidad de la ley

La presente ley tiene por finalidad fortalecer las investigaciones penales en materia ambiental.

Artículo 3. Modificación del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente

Se modifica el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, el cual queda redactado de la siguiente forma:

> **"Artículo 149. Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental**
>
> 149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será exigencia obligatoria la evaluación de un informe fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, sin que condicione la emisión del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido del fiscal de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser evaluado por el fiscal o juez, al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente".

El Proyecto de Ley 9967/2024-CR; que propone la Ley que propone el fortalecimiento del artículo 72 de la Ley General del Ambiente sobre la Consulta Previa. Para ello se plantea la siguiente fórmula normativa:

LEY QUE FORTALECE LA CONSULTA PREVI, AL MODIFICAR EL ARTICULO 72 DE LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE

Artículo 1. Objetivos de la ley

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 72 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Artículo 2. Finalidad de la ley

La presente ley tiene por finalidad fortalecer la consulta previa en la Ley 28621, Ley General del Ambiente, para fortalecer la gobernanza ambiental

Artículo 3. Modificación del artículo 72 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente

Se modifica el artículo 72 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, el cual queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 72. Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas

72.1 Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, económica ni a sus valores tradicionales.

72.2 En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de consulta y la consulta previa establecidas en el convenio 169 de la OIT, se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras y territorios que les corresponda según la legislación pertinente.

[...]"

III. MARCO NORMATIVO

NORMATIVA NACIONAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley 29565, Ley del Ministerio de Cultura.
- Ley 28495, Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.
- Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
- Ley 28736 - Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (2006).
- Código Civil del Perú (1984).
- Código Penal del Perú.
- Reglamento de Inscripción de Comunidades Campesinas y Nativas.

NORMATIVA INTERNACIONAL

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

- Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- Convención Americana de los Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de los derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

IV. INFORMES Y OPINIONES DE LAS ENTIDADES CONSULTADAS RESPECTO A LA INICIATIVAS LEGISLATIVA

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultura solicitó y recibió las opiniones siguientes:

Cuadro 1
Requerimiento de opiniones y respuestas sobre el Proyecto de Ley 3853/2022-CR

Institución	Oficio de requerimiento y respuesta
PODER JUDICIAL	Oficio 542-2022-2023-CPAAAE-CR, del 11-01-2023
OEFA	Oficio 541-2022-2023-CPAAAE-CR, del 11-01-2023
FISCALIA DE LA NACIÓN	Oficio 543-2022-2023-CPAAAE-CR, del 11-01-2023 Atendido con Oficio 128-2023-MP-FN-CN-FEMA, del 18 de enero de 2023
MINISTERIO DEL AMBIENTE	Oficio N°540-2022-2023-CPAAAE-CR, del 11-01-2023 Atendido con Oficio N°00302-2023-MINAM/DM, de fecha 27 de marzo de 2023 Atendido con Carta 014-2023-SIN-PRES, del 19 de enero de 2023.

DEFENSORIA DEL PUEBLO	Oficio 544-2022-2023-CPAAAE-CR, del 11-01-2023 Atendido con Oficio 0173-2024-DP/PAD Atendido con INFORME JURÍDICO DEFENSORIAL 0010-2024-DP/AMASPPI, de fecha 27 de marzo de 2024.

Fuente: Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Opinión ciudadana

Al momento de la elaboración del presente dictamen, se ha identificado cuatro opiniones ciudadanas en contra respecto del Proyecto de Ley 3853/2022-CR; Ley que pretende derogar el artículo 149 de la Ley General del Medio Ambiente

Opinión recibida del Ministerio Público

El Ministerio Público, mediante el oficio 128-2023-MP-FN-CN-FEMA, del 18 de enero de 2023, emitido por la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, concluyó en su informe N°01-2023-MP-FN-CN-FEMA que:

"la propuesta legislativa RESULTA INVIABLE (...)"

El informe argumenta que:

"mediante Decreto Supremo 007-20217-MINAM, en su artículo 2.2 se estableció que: 'El Informe Fundamentado no constituye requisito de procedibilidad de la acción penal. El Fiscal puede formular su requerimiento fiscal, prescindiendo de este, con las pruebas de cargo y de descargo recabadas durante la investigación preparatoria (...)"

Asimismo, en relación con el artículo 149.2 de la Ley General del Ambiente, el documento señala que:

"En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el título décimo tercero del libro segundo del Código Penal que sean desestimados, el fiscal evaluará la configuración del delito de denuncia calumniosa, contemplado en el artículo 402 del Código Penal (...)"

En este sentido, el informe enfatiza que existe un error interpretativo respecto de lo normado, ya que:

"La denuncia calumniosa, maliciosa o falsa se configura cuando una persona señala o asigna a otra la comisión o participación de un delito, pero lo denunciado no se ajusta a la realidad (...)"

Añade además que:

"las denuncias interpuestas por cualquier ciudadano son recepcionadas adecuadamente, pero la mayoría tiene la particularidad de presentarse contra sujetos sin identificar (...)"

En cuanto a la técnica legislativa empleada en los delitos ambientales, el informe resalta que:

"se advirtió que la técnica legislativa empleada en los delitos ambientales, es decir, las leyes penales en blanco, sumaba dificultad en la investigación, ya que obligaba al operador del sistema de justicia a familiarizarse con una rama bastante nueva y con una vasta cantidad de regulación: el derecho ambiental"

Dicha técnica legislativa supone un desafío para los operadores de justicia, pues:

"...la finalidad que tiene actualmente el informe fundamentado, se puede concluir que su objetivo principal es llenar el tipo penal en blanco con las obligaciones ambientales aplicables a los hechos materia de investigación, así como aportar información en torno a las acciones de fiscalización ambiental efectuadas (...)"

Finalmente, el documento concluye que la derogación del artículo 149 de la Ley General del Ambiente afectaría las funciones de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, ya que:

"...si afecta en cuanto a la investigación de los Fiscales de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, puesto que buscar derogar el art. 149 de la Ley General del Ambiente, y aunado a ello dentro de la propuesta se indica que esta derogación implicará la derogación de todas las normas que vayan en contra del Proyecto de Ley, entre las cuales se encuentra el Decreto Supremo 007-20217-MINAM, lo cual es de vital importancia en cuanto a la regulación del informe fundamentado".

Sociedad Nacional de Industrias

Mediante Carta 014-2023-SIN-PRES, de fecha 19 de enero de 2023, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias remite OBSERVACIONES, sosteniendo que:

"La iniciativa legislativa es inadecuada en su planteamiento (...)

Asimismo, el documento enfatiza la relevancia de los informes fundamentados como elementos de apoyo en la determinación de la acción penal:

"Se puede concebir los informes fundamentados como soportes científicos que le permite evaluar al titular de la acción penal si el grado de contaminación supera los estándares ambientales tolerados por ley (...) si se contaba con los permisos, autorizaciones, títulos habilitantes (...)"

En este sentido, se destaca que:

"el informe fundamentado se constituye como un mecanismo de soporte para la construcción de la teoría de caso para la parte acusatoria"

El informe también subraya la necesidad de que estos informes continúen siendo de observancia obligatoria en los procesos penales ambientales:

"...los informes fundamentados deben continuar configurándose como un presupuesto procesal de obligatoria observancia en los procesos penales que versan sobre delitos ambientales y que, si bien el mismo no posee carácter vinculante, es una condición legal que debe apreciar el fiscal para decidir si formula acusación o solicita el sobreseimiento de la causa"

Además, se resalta que la determinación de la conducta antijurídica del agente depende del incumplimiento en sede administrativa, lo que justifica la necesidad de un marco normativo ambiental unificado:

"La conducta antijurídica del agente va a estar determinada por su incumplimiento en sede administrativa; por ello, se requiere de un sistema normativo ambiental unificado (...)"

Finalmente, el documento resalta la importancia del informe fundamentado en la valoración del daño ambiental:

"...la obligatoriedad del informe es trascendental en cuanto mediante este se efectúa una valorización del daño como afectación, más aún cuando este es expedido por el ente administrativo competente".

Asimismo, enfatiza el rol de las entidades administrativas y fiscalizadoras en la investigación de delitos ambientales:

"En la investigación por delitos ambientales es fundamental tener en cuenta el punto de vista de la parte técnica de las entidades administrativas competentes y fiscalizadoras que conocen a fondo la materia del hecho investigado".

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Mediante el Informe 00124-2023-MINAM/SG/OGAJ, de fecha 28 de febrero de 2023, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión respecto a la derogación del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley General del Medio Ambiente, señalando que:

"No resulta necesaria la derogación del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley General del Medio Ambiente, concluyendo que debe ser reevaluado de acuerdo a las opiniones señaladas..."

DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo, mediante el Informe Jurídico Defensorial 0010-2024-DP/AMASPPI, de fecha 27 de marzo de 2024, emitió opinión respecto a la derogación del artículo 149.1 de la Ley General del Ambiente, concluyendo que:

"No es necesaria la derogación del artículo 149.1 del artículo 149 debido a que el Informe Fundamentado no constituye un requisito de procedibilidad para iniciar la formalización de investigación preparatoria en el marco de investigaciones por delitos ambientales"

Asimismo, se hace referencia al XII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, el cual, mediante el Acuerdo Plenario 02-2023/CIJ-112, determinó que:

"Si bien el Informe Fundamentado no es un requisito de procedibilidad para iniciar la formalización de investigación preparatoria, ello no impide que (i) el fiscal pueda solicitarlo durante la investigación y hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia del proceso penal, y (ii) la autoridad

administrativa responsable de emitir el informe correspondiente esté en la obligación de cumplir en el plazo que establece la ley a fin de contribuir a la tutela judicial efectiva y no generarse impunidad"

Por otro lado, el informe sostiene que tampoco es necesaria la derogación del artículo 149.2 de la Ley General del Ambiente, debido a que:

"El delito de denuncia calumniosa se encuentra expresamente tipificado en el artículo 402 del Código Penal; por lo que el artículo 149.2 de la Ley General del Ambiente es una norma de remisión, lo cual no impide que el fiscal evalúe la configuración del delito conforme al artículo 402 del Código Penal"

Cuadro 2
Requerimiento de opiniones y respuestas sobre el Proyecto de Ley 8287/2023-CR

Institución	Oficio de requerimiento y respuesta
Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP	Oficio 3203-2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024
Ministro del Ambiente -MINAM	Oficio 3200-2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024
Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP	Oficio 3204 -2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024
Presidente del Consejo Directivo del OEFA	Oficio 3201-2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024
Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP	Oficio 3205-2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego	Oficio 3202-2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024 Atendido con Oficio N°3610-2024-MIDAGRI/SG, del 25 de setiembre del 2024

Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)	Oficio 3206-2023-2024-CPAAAE/P-CR, del 2 de Julio de 2024

Fuente: Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Opinión ciudadana

Al momento de la elaboración del presente dictamen, no se ha identificado opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 8287/2023-CR; Ley que pretende modificar el Artículo 72 de la Ley General del Medio Ambiente 28611.

4.1. Opinión sobre el proyecto de Ley 8287/2023-CR

Ministerio de Desarrollo Agrario

Mediante el Informe 1117-2024-MIDAGRI-SG/OGAJ, de fecha 17 de septiembre de 2024, suscrito por el director general de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del MIDAGRI concluyó que:

"NO ES COMPETENTE para emitir opinión al Proyecto de Ley 8287/2023-CR"

Cuadro 3
Requerimiento de opiniones y respuestas sobre el Proyecto de Ley 9944/2024-CR

Institución	Oficio de requerimiento y respuesta
MINISTRO DEL AMBIENTE	Oficio 00680-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	Oficio 00709-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA	Oficio 00735-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS, ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ	Oficio 00736-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025
SOCIEDAD PERUNA DE DERECHO AMBIENTAL - SPDA	Oficio 00737-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025
ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA - AIDESEP	Oficio 00738-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025
FEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS, ARTESANAS, INDÍGENAS, NATIVAS Y ASALARIADAS DEL PERÚ – FENMUCARINAP	Oficio 00739-2024-2025-CPAAAE-CR, del 22-01-2025

Fuente: Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Cuadro 4
Requerimiento de opiniones y respuestas sobre el Proyecto de Ley 9967/2024-CR

Institución	Oficio de requerimiento y respuesta
MINISTERIO DEL AMBIENTE	Oficio 00741-2024-2025-CPAAAE-CR, del 24-01-2025
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	Oficio 00742-2024-2025-CPAAAE-CR, del 24-01-2025
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA	Oficio 00743-2024-2025-CPAAAE-CR, del 24-01-2025
ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA – AIDESEP	Oficio 00744-2024-2025-CPAAAE-CR, del 24-01-2025
SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL - SPDA	Oficio 00745-2024-2025-CPAAAE-CR, del 24-01-2025
FEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS, ARTESANAS, INDÍGENAS, NATIVAS Y ASALARIADAS DEL PERÚ – FENMUCARINAP	Oficio 00746-2024-2025-CPAAAE-CR, del 24-01-2025

Fuente: Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

V. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

5.1.1. Del marco normativo

Constitución Política del Perú

El Perú es un país pluricultural y multilingüe, donde coexisten 55 pueblos indígenas u originarios, de los cuales 51 están ubicados en la Amazonía y 4 en los Andes. Según el Ministerio de Cultura, en el territorio nacional se hablan 48 lenguas indígenas, de las cuales 44 son amazónicas y 4 andinas[1], siendo el quechua la de mayor extensión geográfica. Estas comunidades han desarrollado conocimientos, prácticas y sistemas organizativos que han sido transmitidos de generación en generación, lo que las convierte en actores fundamentales en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad del Perú.

Por sus conocimientos ancestrales y esta manera especial de relacionarse con el ambiente, los Pueblos Originarios han permitido que el Perú cuente con abundantes recursos [2]naturales que mantienen cierto sector del país. El Estado en su rol garantista, tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, lo que incluye el respeto irrestricto a su identidad cultural, su autonomía y su participación en la formulación de políticas públicas que los involucren. La consulta previa es un mecanismo esencial para asegurar estos derechos y evitar decisiones que puedan afectar su territorio, su cultura o sus formas de vida.

El Convenio 169 de la OIT y la Obligación del Estado

El **Convenio 169 de la OIT**, ratificado por el Perú en 1994, establece en su **artículo 2** la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Así también el convenio reconoce su derecho a la identidad cultural, social y económica, y señala que el Estado debe asegurar la plena efectividad de estos derechos, respetando sus costumbres, tradiciones e instituciones.

Uno de los mecanismos fundamentales desarrollados en el convenio 169 es el derecho a la consulta previa, estipulado en el artículo 6, el cual dispone que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. Esta

[1] inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf
[2] Sernanp Perú » Página no encontrada

consulta debe realizarse de buena fe, de manera previa y con el objetivo de lograr un acuerdo o consentimiento sobre las medidas que se adopten.

El **artículo 15** del convenio refuerza este derecho al señalar que los pueblos indígenas deben participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Esto es especialmente relevante en un contexto como el peruano, donde las actividades extractivas suelen desarrollarse en territorios indígenas sin su consentimiento, afectando sus medios de vida y su relación con el medio ambiente. También se afectas a poblaciones que están en las áreas de influencia de algún proyecto que por no ser parte de un pueblo indígena no se les hace participe.

La Constitución Política del Perú y la Protección de los Pueblos Indígenas

La **Constitución del Perú (1993)** reconoce los derechos de los pueblos indígenas en varios de sus artículos. El **artículo 89** establece que las comunidades indígenas tienen autonomía en la organización de su vida económica, social y cultural, y que el Estado debe proteger sus derechos colectivos sobre sus tierras.

Asimismo, el **artículo 66** reconoce que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, pero su aprovechamiento debe realizarse de manera sostenible y garantizando los derechos de las comunidades afectadas. En este sentido, la consulta previa es un instrumento clave para garantizar que las decisiones estatales en materia de recursos naturales no vulneren los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, a nivel de Naciones Unidas, está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) que refuerza los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Específicamente su artículo 19 señala que los Estados deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas que puedan afectarlos. Asimismo, el artículo 32 establece el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el desarrollo en sus territorios y a participar en la formulación de políticas que los afecten. Esta norma enfatiza el principio de **consentimiento libre, previo e informado**, lo que significa que los pueblos indígenas deben dar su aprobación antes de que proyectos o actividades económicas se desarrollen en sus territorios.

Las iniciativas legislativas, buscan fortalecer la consulta previa en actividades desarrolladas dentro de las tierras de poblaciones indígenas y la participación de la población de las áreas de influencia. Asimismo, con estos proyectos de Ley se busca **modificar el artículo 149° de la Ley General del Ambiente** para

garantizar que el informe técnico de la autoridad ambiental no sea un requisito condicionante para que el Ministerio Público pueda avanzar en una investigación penal por delitos ambientales. Esta modificación **fortalece la autonomía del Ministerio Público**, permitiéndole actuar con mayor celeridad y eficacia en la persecución de estos delitos sin depender de procesos administrativos que puedan retrasar la justicia. Con las modificaciones planteadas en las propuestas legislativas 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; se busca asegurar que los responsables de delitos ambientales **sean investigados y sancionados de manera efectiva**, sin trabas burocráticas que beneficien la impunidad. De esta manera, se refuerza el compromiso del Estado con la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la degradación ambiental.

Estas iniciativas legislativas buscan fortalecer la consulta previa, asegurando que las decisiones adoptadas respeten la autodeterminación de los pueblos indígenas. La protección del medio ambiente es un eje fundamental en este proceso, ya que los territorios indígenas albergan una gran parte de la biodiversidad del país y su preservación es clave para la lucha contra el cambio climático. La vulnerabilidad de los líderes indígenas, quienes enfrentan constantes amenazas por la defensa de sus territorios, también debe ser abordada mediante la adopción de medidas de protección efectiva y el reconocimiento de su labor en la conservación de los ecosistemas.

El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas no solo es una obligación del Estado peruano en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado, sino que también representa un paso esencial hacia una sociedad más justa e inclusiva. Promover su participación en la construcción de políticas públicas contribuirá a fortalecer la democracia y garantizar un desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y natural del país. En este sentido, la presente propuesta busca generar un marco normativo que asegure el respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo su inclusión en la toma de decisiones, fortaleciendo la consulta previa y garantizando su papel como actores fundamentales en la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

Asimismo, es importante precisar que el análisis constitucional de los Proyectos de Ley 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; parten del principio fundamental de que el desarrollo normativo debe avanzar en la consolidación de derechos, evitando retrocesos que afecten los mismos. Desde esta perspectiva, toda reforma legislativa debe respetar los principios de progresividad, no regresión y razonabilidad, enmarcados en la Constitución Política del Perú, en tratados internacionales de derechos

humanos y en el control de convencionalidad que rige la interpretación de los derechos fundamentales como los señalan los artículos 3, 55 y 44 de nuestra carta magna.

Artículo 55: "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional."

Artículo 44: "Son deberes primordiales del Estado (...) garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación."

El Proyecto de Ley 3853/2022-CR propone la derogación del artículo 149 de la Ley General del Ambiente con el argumento de que este condiciona la actuación del Ministerio Público en la persecución de delitos ambientales y desincentiva a la población a realizar denuncias. La eliminación de restricciones indebidas para el ejercicio de la acción penal es coherente con el artículo 159 de la Constitución, que establece la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos.

Artículo 159: "Corresponde al Ministerio Público:

1. Promover de oficio o a pedido de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia."

El artículo 149.1 de la Ley General del Medio ambiente exige un informe técnico previo de la autoridad ambiental antes de que el fiscal pueda formular una acusación, lo que podría interpretarse como una limitación a la independencia del Ministerio Público en la conducción de la acción penal.

El artículo 2 de la Constitución garantiza derechos fundamentales, entre ellos:

Artículo 2, inciso 22: "Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida."

Un informe técnico especializado en las investigaciones por delitos ambientales responde a la necesidad de contar con criterios científicos y técnicos que permitan sustentar las imputaciones de manera objetiva, garantizando de esta manera proteger el ambiente ante actos que lo atenten.

Por otro lado, el Proyecto de Ley 8287/2023-CR, plantea la modificación del artículo 72 de la Ley General del Medio Ambiente con el propósito de extender el derecho a la consulta previa a las poblaciones ubicadas en áreas de influencia directa e indirecta de proyectos extractivos, aun cuando no sean reconocidas como pueblos indígenas. Esta propuesta responde al principio de igualdad ante la ley, establecido en:

Artículo 2, inciso 2: "Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole."

El derecho a la consulta previa libre e informada está actualmente regulado por la Ley 29785 y el Convenio 169 de la OIT, estableciendo su aplicación a los pueblos indígenas y originarios. El artículo 67 de la Constitución establece que el Estado debe promover el uso sostenible de los recursos naturales y garantizar la participación de la población en la gestión ambiental. Extender el mecanismo de consulta previa a otras poblaciones afectadas no solo refuerza este mandato constitucional, sino que también previene conflictos sociales y asegura un desarrollo equilibrado y participativo, en consonancia con el principio de participación ciudadana consagrado en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución.

Artículo 67: "El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales."

Artículo 2, inciso 17: "Toda persona tiene derecho: A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación."

La modificación del artículo 72 no contraviene los estándares normativos vigentes, sino que amplía el espectro de protección de los derechos ambientales y territoriales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben garantizar la participación de todas las comunidades afectadas por actividades extractivas, sin restringir este derecho únicamente a los pueblos indígenas (Caso Saramaka vs. Surinam, 2007). Además, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales a beneficiarse de los recursos naturales en sus territorios está alineado con:

Artículo 66: "Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento."

Los proyectos de ley bajo análisis contienen elementos que pueden fortalecer la protección de derechos constitucionales, pero requieren ajustes para evitar impactos negativos. La derogación del artículo 149 de la Ley General del Ambiente debe ir acompañada de un mecanismo que garantice la base técnica en las investigaciones fiscales sobre delitos ambientales, mientras que la ampliación de la consulta previa a poblaciones en áreas de influencia directa e indirecta que desarrolla el Proyecto de Ley **8287/2023-CR,** debe considerar los criterios ya establecidos para efectuar la consulta previa para evitar su desnaturalización. Es necesario entonces, impulsar legislaciones que avancen en la protección de derechos sin retroceder en lo ya alcanzado y en total respeto a los principios de progresividad, igualdad y protección ambiental reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos.

5.1.2 Análisis de las propuestas legislativas

Las propuestas legislativas 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; pretenden modificar y derogar algunos artículos de la Ley General del Medio Ambiente.

El Proyecto de Ley 3853/2022-CR, propone la derogación del artículo 149 de la Ley General del Ambiente el cual establece dos disposiciones clave en la persecución de delitos ambientales. En primer lugar, exige que el Ministerio Público obtenga un informe técnico fundamentado de la autoridad ambiental antes de pronunciarse sobre una acusación o sobreseimiento en casos de delitos ambientales. En segundo lugar, dispone que, si una denuncia ambiental es desestimada, el fiscal evalúe la configuración del delito de denuncia calumniosa. El proyecto argumenta que estas disposiciones limitan la autonomía del Ministerio Público y desincentivan la denuncia ciudadana de delitos ambientales.

Uno de los principales beneficios del proyecto es que otorga mayor independencia a la Fiscalía para investigar delitos ambientales sin necesidad de esperar un informe previo de la autoridad ambiental, lo que podría agilizar los procesos y reducir la impunidad en este tipo de crímenes. También se considera que eliminar la amenaza de la denuncia calumniosa fomentaría una mayor participación ciudadana en la vigilancia ambiental, facilitando que las personas denuncien sin temor a represalias legales en caso de que su acusación no prospere. Además, se alinea con el principio de que el Ministerio

Público debe contar con la libertad de dirigir sus investigaciones de manera autónoma, solicitando informes periciales cuando lo considere necesario, en lugar de depender exclusivamente de una entidad administrativa.

La propuesta presenta desafíos importantes. El informe técnico de la autoridad ambiental cumple la función de garantizar que las denuncias tengan un sustento especializado, lo que es fundamental en casos de delitos ambientales donde se requieren conocimientos científicos y técnicos. Si se elimina este requisito, existe el riesgo de que se inicien procesos sin pruebas adecuadas, lo que podría derivar en absoluciones o fallos judiciales débiles. Asimismo, la derogación total del artículo podría generar un aumento de denuncias infundadas, sobrecargando el sistema judicial y desviando recursos de investigaciones de mayor relevancia. También se podría debilitar la coordinación entre el Ministerio Público y la autoridad ambiental, lo que afectaría la calidad de las investigaciones.

La intención de fortalecer la lucha contra los delitos ecológicos es positiva, su aplicación sin mecanismos de control podría tener efectos contraproducentes. En lugar de una derogación total, una alternativa sería reformar el artículo 149 para que el informe técnico no sea un requisito obligatorio, pero que el fiscal tenga la facultad de solicitarlo cuando lo considere necesario. También sería recomendable mantener la posibilidad de investigar denuncias calumniosas, pero con criterios más flexibles que solo se apliquen en casos de mala fe comprobada. Para evitar dilaciones en los procesos, se podría establecer plazos estrictos para la emisión de informes ambientales y sanciones en caso de incumplimiento.

El Proyecto de Ley 8287/2023-CR; propone la modificación del artículo 72 de la Ley General del Medio Ambiente (Ley 28611) con el objetivo de extender la obligación de consulta previa a toda la población de las áreas de influencia directa e indirecta de proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales. Actualmente, este derecho se aplica únicamente a los pueblos indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa (Ley 29785).

La iniciativa legislativa busca reconocer a las poblaciones no indígenas que habitan en las zonas de influencia de proyectos extractivos como sujetos de consulta, argumentando que también pueden verse afectadas en términos ambientales, económicos, sociales y culturales. Con esta propuesta se buscaría no solo reducir conflictos sociales sino también garantizar una participación más amplia de la población en la toma de decisiones sobre el uso de recursos naturales.

El Proyecto de Ley 9944/2024-CR; tiene una intención de modificar el numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente sobre el informe da la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental.

El Proyecto de Ley 9967/2024-CR; tiene como objeto modificar el artículo 72 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, con la finalidad de fortalecer la consulta previa en la Ley 28611, para fortalecer la gobernanza ambiental.

5.2. Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma

Luego de analizar las propuestas legislativas en cuestión, se observa que, el marco normativo en el que se inscriben los Proyectos de Ley 8287/2023-CR, 3853/2022-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; se encuentra fundamentado en principios constitucionales, normativas ambientales nacionales e internacionales, y el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Ambos proyectos generados la participación de especialistas en sus respectivos campos con sus informes técnicos que pueden contribuir a la mejora de los artículos que se buscan modificar o derogar.

Las propuestas legislativas pretenden ampliar el derecho a la consulta previa a todas las poblaciones de las áreas de influencia directa e indirecta de proyectos extractivos, no solo a los pueblos indígenas. Este enfoque responde a estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental, como el Convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa como un mecanismo de salvaguarda para las comunidades afectadas por proyectos que impacten su territorio y sus recursos naturales. Asimismo, este proyecto se enmarca en la Ley de Participación y Control Ciudadano que reconoce el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones que afecten su entorno, y en la Ley de Consulta Previa (Ley 29785).

Por otro lado, plantean la derogación del artículo 149 de la Ley General del Ambiente, ha puesto en evidencia la necesidad de revisar el procedimiento penal en materia ambiental. En particular, la exigencia de un informe técnico de la autoridad ambiental antes de que la Fiscalía pueda actuar, y la posible criminalización de denuncias desestimadas, han sido aspectos que especialistas han cuestionado, argumentando que pueden retrasar la persecución de delitos ambientales y desincentivar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente.

Ambos proyectos han generado un espacio que puede derivar en una reforma más equilibrada, donde se garantice el acceso a la consulta y participación de

las comunidades en las decisiones ambientales sin menoscabar los derechos específicos de los pueblos indígenas, y donde la Fiscalía pueda actuar con mayor autonomía sin perder el respaldo técnico necesario en los casos de delitos ambientales.

5.3. Análisis Costo - Beneficio

El artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, establece que los proyectos de ley contengan un Análisis Costo - Beneficio, que expresen en términos cuantitativos y cualitativos los impactos económicos y sociales.

> ***Artículo 75. Requisitos y presentación de las proposiciones***
> *(...) las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos (...); el análisis costo-beneficio de la futura norma legal que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental.*
> *(...)*
> Los beneficios o costos pueden expresarse en unidades monetarias o no monetarias, y podrían valorizarse dependiendo de si se cuenta con precios de mercado o con precios estimados por las metodologías de análisis de costo - beneficio.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en el ejercicio de sus competencias y conforme a su Plan de Trabajo, aclara que los temas abordados en la presente propuesta legislativa no generarán gastos adicionales al presupuesto público del Estado. Las entidades involucradas deberán ejecutar las medidas y acciones necesarias utilizando sus propios recursos, respetando lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

VI. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de conformidad con el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **APROBACIÓN** de

los Proyectos de Ley 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR con el siguiente **TEXTO SUSTITUTORIO**:

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES

Artículo único. Modificación de los artículos 72 y 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente

Se modifican los párrafos 72.1 y 72.2 del artículo 72, y el párrafo 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, en los siguientes términos:

> **Artículo 72.** Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, ***y población del área de influencia***
>
> **72.1** Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas; **así como de la población de las áreas de influencia**, adoptan las medidas necesarias para evitar el detrimento **a su integridad cultural, social,** económica **y** a sus valores tradicionales.
>
> **72. 2.** En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos **de consulta previa establecidas en el Convenio 169 de la OIT,** se orientan preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras **y territorios** que les corresponda según la legislación pertinente. **Para la población asentada en las áreas de influencia que no esté sujeta a**

consulta previa, se establecen mecanismos de participación ciudadana, de modo que se asegure para las comunidades afectadas el derecho a presentar observaciones sobre los proyectos antes de su aprobación. Estos mecanismos de participación permiten su participación en el proceso de toma de decisiones y en la determinación de medidas de mitigación o compensación, según corresponda.

[...]

Artículo 149. Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental

149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe **técnico** fundamentado por escrito por la autoridad ambiental, **sin que se condicione la emisión** del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido del fiscal de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser merituado **como prueba técnica** por el fiscal o juez al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente. **El fiscal continuará con la investigación y formula su requerimiento sin necesidad de esperar el informe, cuando existan otros medios probatorios suficientes que acrediten la infracción.**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Efecto y alcance de la Ley

Lo dispuesto en la presente ley mantiene el efecto y alcance de toda norma vigente en el Perú que reconozca el derecho de la persona a participar en la conservación del ambiente y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando la plena participación colectiva de quienes se vean directa o indirectamente impactados.

SEGUNDA. Adecuación del Reglamento de los párrafos 72.1 y 72.2 del artículo 72, y del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente

El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento de los párrafos 72.1 y 72.2 del artículo 72 y del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, aprobado por el Decreto Supremo 007-2017-MINAM, a la modificación dispuesta en la presente ley, en un plazo máximo de treinta días hábiles contados desde su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación

Se deroga el párrafo 149.2 del artículo 149 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente.

Dese cuenta
Sala de comisiones
Semi Presencial – Plataforma Microsoft Teams.
Lima, 11 de marzo de 2025.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BERMEJO ROJAS Guillermo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04/04/2025 09:19:53-0500

GUILLERMO BERMEJO ROJAS
Presidente

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: QUITO SARMIENTO Bernardo Jaime FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 10:01:40-0500

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Vicepresidente

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MITA ALANOCA Isaac FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 10:39:47-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MITA ALANOCA Isaac FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 10:39:59-0500

ISAAC MITA ALANOCA
Secretario

ARTURO ALEGRÍA GARCÍA
MIEMBRO TITULAR

MERY ELIANA INFANTES CASTAÑEDA
MIEMBRO TITULAR

JENY LUZ LÓPEZ MORALES
MIEMBRO TITULAR

AURISTELA OBANDO MORGAN
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: KAMICHE MORANTE Luis Roberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 14:42:02-0500

MAGALY ROSMERY RUÍZ RODRÍGUEZ
MIEMBRO TITULAR

LUIS ROBERTO KAMICHE MORANTE
MIEMBRO TITULAR

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: TAIPE CORONADO Maria Elizabeth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 11:43:57-0500

MARÍA ELIZABETH TAIPE CORONADO
MIEMBRO TITULAR

EDRAS RICARDO MEDINA MINAYA
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: VERGARA MENDOZA Elvis Heman FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 16:56:29-0500

ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA
MIEMBRO TITULAR

KAROL IVETT PAREDES FONSECA
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: ROBLES ARAUJO Silvana Emperatriz FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/04/2025 12:15:16-0500

SILVANA EMPERATRIZ ROBLES ARAUJO
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: LUQUE IBARRA Ruth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10/04/2025 11:42:20-0500

RUTH LUQUE IBARRA
MIEMBRO TITULAR

ELÌAS MARCIAL VARAS MELÉNDEZ
MIEMBRO TITULAR

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

INTEGRANTES ACCESITARIOS

EDUARDO ENRIQUE CASTILLO RIVAS
MIEMBRO ACCESITARIO

NILZA CHACÓN TRUJILLO
MIEMBRO ACCESITARIO

VÍCTOR SEFERINO FLORES RUÍZ
MIEMBRO ACCESITARIO

DAVID JULIO JIMÉNEZ HEREDIA
MIEMBRO ACCESITARIO

CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
MIEMBRO ACCESITARIO

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
MIEMBRO ACCESITARIO

CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA
MIEMBRO ACCESITARIO

FLAVIO CRUZ MAMANI
MIEMBRO ACCESITARIO

ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO
MIEMBRO ACCESITARIO

JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ
MIEMBRO ACCESITARIO

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3853/2022-CR, 8287/2023-CR, 9944/2024-CR y 9967/2024-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY QUE MODIFICA LA LEY 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES.

HÉCTOR VALER PINTO
MIEMBRO ACCESITARIO

JOSÉ BERNARDO PAZO NUNURA
MIEMBRO ACCESITARIO

LUIS GUSTAVO CORDERO JON TAY
MIEMBRO ACCESITARIO

JORGE ALBERTO FIGARI MORANTE
MIEMBRO ACCESITARIO

ALFREDO AZURÍN LOAYZA
MIEMBRO ACCESITARIO